

# ABRIL

## REVISIÓN DEL AÑO

**GUINEA:** Miles protestaron contra una parálisis política que afectó los servicios públicos.

**BRASIL:** Millones de trabajadores participaron en protestas o permanecieron en sus hogares durante el día de paro contra la corrupción y la propuesta de cambios a las leyes laborales y de pensiones.

**CAMERÚN:** Tras 93 días de corte, el acceso a internet fue finalmente restaurado en las regiones anglófonas, pero la marginalización de las voces anglófonas no cesó.

**TURQUÍA:** En un clima represivo y con muchas voces disidentes encarceladas, el presidente Erdoğan obtuvo vastos poderes tras ganar un referéndum por un estrecho margen.

**ARMENIA:** Las elecciones fueron empañadas por denuncias de fraude, compra de votos y malversación de recursos estatales en apoyo de los candidatos del partido oficialista.

El **bloqueo de Internet** impuesto cuatro meses atrás en las regiones angloparlantes de Camerún llegó a su fin en abril, para alivio de quienes habían quedado aislados del mundo exterior; no obstante, se mantuvieron importantes restricciones de las libertades fundamentales. Entretanto, en Mongolia los medios de comunicación formaron un frente unido contra una propuesta de **cambios legales** que harían más fácil para las autoridades imponerles multas. El 27 de abril, más de una docena de estaciones de televisión se oscurecieron y por lo menos siete periódicos imprimieron su primera plana en negro para llamar la atención sobre los efectos que estos cambios tendrían sobre la libertad de expresión. La preocupación acerca del espacio cívico en Mongolia fue en aumento en el período que precedió a las elecciones de junio, que estuvieron marcadas por acusaciones de corrupción.

A medida que se aproximaron las elecciones, también aumentaron en Senegal los cuestionamientos del espacio cívico y las consiguientes protestas. Miles de personas **protestaron** en la capital, Dakar, contra la ofensiva en curso contra la oposición política. La protesta fue organizada por el movimiento juvenil *Y'en a marre* (“Estoy harto”), que había desempeñado un rol clave en la movilización de votantes para derrotar al presidente Abdoulaye Wade cuando éste se postuló para un polémico tercer mandato en 2012. Las protestas fueron alentadas por la preocupación de que las voces de la oposición fueran silenciadas ante las elecciones de julio. Un temor similar se hizo realidad en Turquía, donde bajo el estado de emergencia y con miles de voces disidentes silenciadas por el encarcelamiento y el control estricto de los medios, un **referéndum** celebrado en abril y ganado por un estrecho margen confirió poderes exorbitantes al presidente Recep Tayyip Erdoğan. **Las elecciones en Armenia** también fueron enturbiadas por la corrupción y la violencia contra periodistas.

Al igual que en Senegal, en otros países de la región tuvieron lugar durante este mes varias movilizaciones de jóvenes, las cuales con frecuencia suscitaban una violenta respuesta estatal. En Guinea-Bissau el persistente estancamiento político sacó a los jóvenes a las calles en demanda de cambio,

en abril y a lo largo de todo el año. En Níger, cuando unos 23.000 estudiantes protestaron en la capital, Niamey, en reclamo de mejores condiciones de vida, la policía respondió con gases lacrimógenos y golpizas; un manifestante, Malah Bagalé, resultó muerto. Los testigos del hecho informaron que el joven había sido golpeado por una granada de gas lacrimógeno. Miles de personas marcharon en su funeral; a continuación, la indignación de la opinión pública fue alimentada por la circulación de videos de golpizas policiales, que eventualmente resultó en el arresto de tres oficiales de policía. Sin embargo, **al mes siguiente** una protesta anticorrupción organizada por una coalición de OSC fue prohibida y dos destacados activistas fueron detenidos por expresarse en contra de la prohibición.

Más de una docena de jóvenes activistas fueron **arrestados** durante una marcha en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo (RDC). Los jóvenes protestaban por la falta de limpieza de su ciudad y pedían a las autoridades locales y a los ciudadanos mayores esfuerzos para limpiarla; aparentemente fueron atacados por llevar puestas camisetas de LUCHA (*Lutte pour le changement* – Lucha por el cambio). LUCHA es un movimiento juvenil que disiente con el gobierno y hace campaña para que el presidente Joseph Kabila cumpla con el límite constitucional de dos mandatos presidenciales consecutivos. Posteriormente en el mismo año, cuatro activistas de LUCHA fueron **detenidos** durante más de 75 días. Por su parte, también en Nouakchott, la capital de Mauritania, la policía disolvió, poco después de iniciada, una **marcha** organizada por unos 100 jóvenes activistas. La policía golpeó a los participantes de la Marcha Pacífica de la Juventud Mauritana con bastones, y arrestó y encarceló a 10 de ellos. Entre los atacados se encontraban algunos miembros del movimiento juvenil *Je m'engage* (“Yo me comprometo”), que promueve el cambio social.

Activistas angoleños se movilizaron en Benguela y en Luanda, la capital, para recordar el **Día de la Reconciliación Nacional**, instituido en memoria de quienes fueron asesinados durante la guerra civil ocurrida entre 1975 y 2002. No obstante, la fuerte presencia policial disuadió de participar a muchas

personas. El mes anterior, cientos de mujeres angoleñas habían protestado en reclamo de la despenalización del aborto. En Brasil, la indignación popular por la gran corrupción y las acciones inexplicables de un presidente que no había sido electo por el voto popular abrieron paso en abril a una **huelga general de un día**, una de las muchas protestas que tuvieron lugar a lo largo del año. En Georgia, por su parte, el secuestro y posterior matrimonio forzoso de una mujer de 17 años de edad provocó **protestas** en la capital, Tbilisi. Los manifestantes exhortaron al gobierno a que pusiera fin a la práctica de los matrimonios precoces y forzados. En Nueva Zelandia se realizó una protesta silenciosa contra la guerra durante el **Día de los Cuerpos del Ejército de Australia y Nueva Zelandia (ANZAC)**, una fecha conmemorativa militar, lo cual suscitó el debate de si se trataba del día apropiado para hacer una protesta. Entretanto, los organizadores de la manifestación “**Caminando por Ella**”, una marcha pacífica en solidaridad con las mujeres de Arabia Saudita, reportaron incesantes actos de difamación por parte de los medios de Kuwait y Arabia Saudita, además de amenazas telefónicas y en las redes sociales. En Sudán, cuando los desplazados internos ubicados en un campo de refugiados de Darfur Occidental **protestaron** contra el traslado de un mercado, la policía prendió fuego a los puestos del mercado y utilizó munición real, matando a dos mujeres y un niño.

La acción sindical fue atacada con medidas restrictivas en diversos contextos durante el mes de abril. En Trinidad y Tobago, miembros del Sindicato de Trabajadores Petroleros **protestaron** por las condiciones laborales, pero la compañía consiguió una orden para impedirles protestar en su lugar de trabajo y envió policías armados para sacarlos por la fuerza. En Argentina, la policía utilizó gases lacrimógenos y bastones para **desalojar** a un grupo de maestros en huelga que intentaba armar una carpa docente frente al Congreso Nacional. Los docentes estaban haciendo huelga como parte de un proceso de disputa salarial. Ante la indignación pública generalizada por la violencia, los docentes fueron autorizados a manifestarse frente al Congreso. La violencia también fue empleada contra una huelga general en el mismo

mes. Estos sucesos se enmarcan en la tendencia al incremento de la protesta laboral y social en Argentina, donde **984** protestas de ese tipo fueron reportadas solamente entre enero y marzo. Entretanto, en Burkina Faso se presentó un **proyecto de ley** para evitar que amplios sectores de trabajadores del sector público pudieran hacer huelgas, así como para permitir a los organismos estatales reclutar a trabajadores rompehuelgas. La sociedad civil condenó el proyecto por violatorio de las libertades de asociación y reunión pacífica.

Abril fue un mes sombrío para la libertad de prensa: el lanzamiento del **Índice Mundial de la Libertad de Prensa** 2017 de Reporteros sin Fronteras evidenció las peores condiciones para la libertad de prensa registradas en la historia de la medición, mientras que la edición 2017 del informe **Libertad de Prensa** de Freedom House exhibió las peores condiciones en 13 años: se estima que tan solo el 13% de la población mundial disfruta de libertad de prensa. Una de las maneras en que la libertad de los medios fue atacada en 2017 fue a través del asesinato de periodistas de alto perfil. **Yameen Rashad**, un prominente periodista y defensor de derechos humanos de Maldivas, fue asesinado a puñaladas en abril. Estaba involucrado en una campaña para identificar a los responsables de la desaparición de otro periodista y defensor de derechos humanos, Ahmed Rilwan, ocurrida en 2014. Pocos días después del asesinato de Yameen Rashad, el presidente de Maldivas, Abdulla Yameen, declaró que la libertad de expresión no estaba protegida en casos que involucraran una burla contra el Islam. En Australia, por su parte, se produjo en abril un retroceso del **derecho a la privacidad**, cuando entraron en vigencia nuevas leyes de retención de datos que requerirán que las compañías de telecomunicaciones conserven metadatos hasta 2019 y los compartan con las agencias de seguridad.

En el resto del mundo, el panorama se caracterizó una vez más por las amenazas experimentadas por los defensores de derechos humanos, que incluyeron desde el uso de lenguaje estigmatizante hasta la detención y las amenazas de muerte. En Guinea Ecuatorial, dos activistas, Enrique Asumu

y Alfredo Okenve, fueron **detenidos arbitrariamente** e interrogados por el viceprimer ministro del país. Ambos eran los principales líderes del Centro de Estudios e Iniciativas para el Desarrollo, una OSC que promueve los derechos humanos y la buena gobernanza, en particular en relación con los recursos naturales. En 2016 se había emitido una orden que obligó a la organización a suspender sus operaciones.

En un discurso pronunciado en abril, el entonces presidente de Kirguistán, Almazbek Atambayev, **acusó** a las OSC y a los defensores de derechos humanos de utilizar financiamiento extranjero para imponer “valores foráneos” a la población y declaró que era necesario defender al país de los activistas de derechos humanos. Esto resultó consistente con el patrón vigente de difamación de la sociedad civil en el discurso político; el mes anterior, el funcionario había acusado a los periodistas independientes de buscar desestabilizar el país, y más adelante **culpó** a los defensores de derechos humanos de atizar las tensiones étnicas.

Entretanto, en el contexto de una dictadura de larga data se observaron en Burundi escenas escalofriantes cuando alrededor de **2.500 miembros** de la Imbonerakure, la milicia juvenil progubernamental, marcharon en el norte del país para exigir que se utilizara la violencia, e incluso la violencia sexual, contra los opositores. Otras marchas similares se llevaron a cabo en otras partes de Burundi, y el presidente del Senado también instó a la acción contra los “rebeldes”. En Burundi la violencia es más que una amenaza: desde abril de 2015, cuando las protestas contra la decisión del presidente Pierre Nkurunziza de presentarse a un tercer mandato fueron violentamente reprimidas, se han reportado **1.200 muertos** y cientos de casos de desapariciones forzadas.

Los trabajadores humanitarios continuaron enfrentando peligros en Somalia: un **convoy de ayuda** de los EAU que llevaba agua a las zonas afectadas por la sequía fue atacado con una bomba, mientras que se informó que cuatro trabajadores humanitarios somalíes fueron secuestrados por el grupo terrorista Al Shabab.

En un tono más positivo, el saliente Relator Especial de la ONU Maina Kiai, cuyo mandato finalizó en abril, **lanzó FOAA Online!**, una recopilación accesible de argumentos legales listos para usar, basados en las leyes internacionales, para ayudar a la sociedad civil y a los profesionales del Derecho en sus reclamos en defensa de los derechos de reunión y asociación.

## GUINEA-BISSAU: MILES DE MANIFESTANTES PROTESTAN CONTRA LA PARÁLISIS POLÍTICA

En **Guinea-Bissau** las protestas solían ser poco frecuentes, pero la crisis política llevó a la gente a las calles. En 2015, el presidente José Mário Vaz, conocido como Jomav, despidió al primer ministro, a pesar de que éste tenía una clara mayoría parlamentaria, y nombró a un reemplazante del partido de la oposición. Esta acción fue rápidamente declarada ilegal por el tribunal constitucional del país, en una muestra inusual de independencia judicial que fue **acogida positivamente** por muchos integrantes de la sociedad civil. Sin embargo, el resultado fue una prolongada parálisis política: desde el inicio de la crisis el parlamento dejó de aprobar presupuestos y leyes, e incluso de reunirse. Esto significó que las bases del gobierno comenzaron a **desmoronarse**, ya que los hospitales, las escuelas, la policía y los tribunales quedaron desfinanciados y los sueldos del sector público permanecieron impagos. Lo que comenzó como una maniobra a nivel de élites entre rivales políticos por la sucesión en el liderazgo, acabó teniendo un impacto directo en las vidas de los ciudadanos de Guinea-Bissau, a quienes les fueron negados los servicios más básicos.

En respuesta a ello, en el mes de **marzo** cientos de personas se reunieron en las calles de la capital, Bissau, para protestar por la situación y exigir la renuncia del presidente Jomav. Otras **miles de personas protestaron** en abril, con los jóvenes a la cabeza. Si bien fueron pacíficas, las manifestaciones



recibieron una contundente respuesta policial, que incluyó el uso de gases lacrimógenos. Siete integrantes del **Movimiento de Ciudadanos Conscientes y Disconformes**, una OSC que promueve la democracia y el imperio de la ley, fueron detenidos y retenidos durante varias horas, acción que fue condenada por la **Liga de Derechos Humanos de Guinea**. Cientos de personas volvieron a protestar en **julio** y en **octubre**, y los organizadores de las protestas alegaron que la fuerte presencia de las fuerzas de seguridad disuadió a muchas personas de unirse a ellas.

Si bien en **noviembre de 2016** el presidente Jomav nombró a un nuevo primer ministro, perteneciente esta vez al partido gobernante, éste permaneció dividido y el presidente incumplió los plazos de la CEDEAO para formar un gobierno de consenso aceptable para el parlamento. La democracia sigue siendo frágil en un país con un historial de múltiples golpes militares, en el cual ningún presidente electo ha completado su mandato. La sociedad civil urge a quienes tienen actualmente las riendas del poder a tratar a la democracia con mayor respeto y a escuchar las demandas que el pueblo ha articulado a través de las protestas para defender los principios democráticos y para que el acceso a los servicios esenciales no se vea obstaculizado por las disputas políticas.

## BRASIL: UNA HUELGA GENERAL PONE EN EVIDENCIA LA MAGNITUD DE LA INSATISFACCIÓN

En los últimos años **Brasil** ha sido sede de numerosas protestas, provocadas por las revelaciones de una corrupción institucionalizada y generalizada que se extiende a lo largo de todo el espectro político (*véase enero*), además de por el enojo ante el desempleo y las fallas en la provisión de servicios esenciales. En 2017, muchas protestas enfrentaron al gobierno del presidente Michel Temer, quien se benefició del escándalo de corrupción para reemplazar a Dilma



Activistas del Movimiento de Trabajadores sin Techo protestan contra cortes presupuestarios que afectan a los programas de vivienda social

Crédito: Getty Images

Rousseff en la presidencia y luego utilizó el poder que le daba su cargo para **eludir el enjuiciamiento** por varias acusaciones de corrupción. Las protestas se centraron en el papel del partido gobernante en la corrupción y en las políticas neoliberales y de austeridad aplicadas por el gobierno del presidente Temer.

En abril tuvo lugar una protesta emblemática, cuando los sindicatos llamaron a una **huelga general** de un día, la primera en más de una década. La huelga afectó a **cada uno** de los estados de Brasil y colocó al país en un **cese de funcionamiento parcial** cuando millones de trabajadores se unieron a las protestas o se quedaron en casa. **José Henrique Bortoluci**, del Centro de Investigación y Documentación de la Historia Contemporánea de Brasil en la **Fundación Getúlio Vargas**, habla del trasfondo de la huelga:

*La huelga de abril, que virtualmente paralizó al país por un día entero, resultó de la combinación de dos factores. El primero fue la crisis del gobierno de Temer, que se desató al divulgarse la evidencia del involucramiento del propio Temer, así como de varios ministros y políticos muy cercanos a él, en escándalos de corrupción de grandes proporciones. El segundo fueron las tentativas del gobierno de impulsar dos reformas que impactarían profundamente sobre los trabajadores: la **nueva ley laboral** (promulgada por el presidente en julio) y la **reforma previsional** (todavía en trámite parlamentario). Otros movimientos sociales de oposición al gobierno, así como los movimientos de estudiantes, feministas, LGBTI y de activismo urbano también se unieron a las protestas.*

Durante el día de la huelga se produjeron violentos enfrentamientos en varios lugares y las fuerzas de seguridad utilizaron **gases lacrimógenos** contra los cortes de rutas provocados por los manifestantes. Desde que el presidente Temer asumió el poder, la violencia contra los defensores de derechos humanos ha **crecido** y se han propuesto varias leyes para criminalizar las manifestaciones. Esto significa, continúa José Henrique, que la violencia de las fuerzas de seguridad ya no sorprende en el Brasil actual:

*Es costumbre en nuestro país que el gobierno reaccione en forma bastante violenta cuando hay enfrentamientos con manifestantes. Esto es lo que ocurrió durante la **huelga de abril**. Muchos activistas señalan que desde 2013, y como legado del Mundial de Fútbol y de las Olimpiadas, las fuerzas policiales se han vuelto más eficientes a la hora de reprimir las protestas y utilizar fuerza excesiva, dificultando así la materialización de las protestas. Este ha sido el caso, en particular, en ciudades que en los últimos años han tenido numerosos movimientos de impacto nacional, como Río de Janeiro y San Pablo.*

*Otra forma frecuente de reacción gubernamental ha sido ignorar deliberadamente a la opinión pública y fortalecer aún más la alianza con el Congreso y ciertos sectores económicos y mediáticos. A lo largo de 2017, Temer tuvo las cifras de aprobación más bajas de cualquier presidente de la historia brasileña, y ciertamente una de las más bajas del mundo, lo cual no le impidió permanecer en el poder, pese a su total carencia de legitimidad.*

La huelga general fue solo una de las muchas huelgas que tuvieron lugar en Brasil durante 2017, cuando numerosas protestas fueron reprimidas con violencia. Antes de la huelga se realizaron en marzo y abril varias protestas; en una de ellas el manifestante estudiantil **Edvaldo de Silva** murió al ser alcanzado por una bala de goma. Decenas de miles de brasileños continuaron **protestando** en mayo y junio, muchos de ellos pidiendo la renuncia del presidente Temer y la celebración de nuevas elecciones. Nuevamente fue desplegada la policía antidisturbios, que utilizó gases lacrimógenos, granadas de aturdimiento y balas de goma para detener una manifestación que avanzaba hacia el Congreso. Otra **ola** de protestas tuvo lugar en octubre, cuando una manifestación convocada por movimientos sociales, artistas y partidos políticos en Río de Janeiro fue reprimida con gases lacrimógenos y gas pimienta. Durante octubre también se produjeron una ocupación del Ministerio de Planificación de Brasil, organizada por el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra en demanda de una reforma agraria, y una marcha



masiva del Movimiento de Trabajadores Sin Techo en reclamo del derecho a la vivienda. Sin embargo, una serie de ataques policiales contra organizaciones de izquierda causó preocupación, ya que dejó entrever la posibilidad de que se estuviera preparando el terreno para ampliar el alcance de la definición de terrorismo y reprimir a los movimientos políticos.

Por el lado positivo, José Henrique observa un nuevo dinamismo que atrajo a mucha gente, y especialmente a los jóvenes, al activismo, y que aporta algo que la sociedad civil brasileña puede aprovechar constructivamente:

*En 2017 la sociedad civil brasileña se tornó crecientemente dinámica, con el surgimiento de movimientos sociales que abogaban por la renovación política, los cuales resultaron especialmente populares entre los sectores más jóvenes de la población, que generalmente se sienten bastante excluidos del sistema político tal como se organiza actualmente.*

Sin embargo, aunque la diversidad de los movimientos que participaron de las protestas dio cuenta de una indignación extendida, se observa – subraya José Henrique – una desconexión entre los diversos movimientos que puede reducir su impacto:

*2017 fue un año muy contradictorio y desigual en términos del desempeño de la sociedad civil en Brasil. Los movimientos sociales no fueron capaces de sostener un movimiento nacional de oposición al gobierno de Temer, al que muchos consideran ilegítimo. El presidente continúa gobernando el país pese a haber alcanzado el poder como resultado de un proceso de juicio político altamente controvertido – un golpe parlamentario, según una parte de la opinión pública – y a pesar de estar impulsando reformas que son en casi todos los sentidos opuestas al programa de gobierno seleccionado en las elecciones de 2014.*

*A pesar de su enorme importancia, el amplio movimiento observado en la huelga de abril no ganó impulso a lo largo del año, o por lo menos*

*no lo hizo bajo la forma de un movimiento antigubernamental y anti-neoliberal nacional unificado... El escenario actual se caracteriza por la profunda politización de diversos sectores de la sociedad, a la vez que por la desconexión, ya sea por falta de fortaleza o por efecto de desacuerdos políticos o estratégicos entre los movimientos a nivel nacional.*

Ante las elecciones presidenciales previstas para 2018, cabe esperar más movilizaciones masivas. El desafío para los diversos movimientos de protesta y otros grupos de la sociedad civil brasileña consistirá en establecer conexiones más sólidas que sienten una posición mucho más coherente contra la corrupción y la mala gobernanza, a la vez que continuar ofreciendo plataformas de participación significativas para los que recién comienzan a movilizarse.

## CAMERÚN: CORTES DE INTERNET REVELAN LA NEGATIVA DEL ESTADO A ESCUCHAR

En abril se produjo un breve momento de respiro en las regiones angloparlantes del sudoeste y noroeste de **Camerún**, cuando se **restableció** el acceso a internet después de 93 días de corte. El prolongado bloqueo se había producido en respuesta a las protestas que estallaron en noviembre de 2016, provocadas por el sentimiento de larga data de marginalización de las comunidades angloparlantes en este país predominantemente francófono.

La prolongada prohibición impuesta en Camerún constituyó una lisa y llana negación de derechos, ya que el acceso a internet ha sido reconocido como un derecho humano por una **resolución de la ONU** de junio de 2016. La falta de acceso tuvo un profundo impacto tanto sobre la libertad de expresión como sobre la economía; su costo estimado fue de **38,8 millones de dólares**.

La prohibición afectó especialmente a la región debido a que la mayor parte de la industria tecnológica de Camerún se **encuentra** en la región Sudoeste. El mismo trabajo de investigación que calculó el costo económico, realizado por la organización **Collaboration on International ICT Policy in East and Southern Africa**, también indicó que la restricción del acceso a internet que el gobierno de Camerún implementó con tanto entusiasmo forma parte de una tendencia regional más amplia: desde 2015 por lo menos 12 gobiernos han interrumpido el acceso a internet en el África Subsahariana, entre ellos el de Togo en 2017 (*véase agosto*). Un **informe de la UNESCO** de 2017 reveló que a nivel mundial se produjeron 56 cierres de internet durante el año; esto generó temor de que la imposición de estas restricciones se haya convertido en la **nueva norma**. Camerún se hizo acreedor del poco envidiable récord de haber tenido la suspensión más prolongada.

**Maximilienne Ngo Mbe**, de la **Red de Defensores de Derechos Humanos de África Central (REDHAC)**, describe el contexto más amplio de ataques contra la libertad de expresión y el impacto de estas restricciones sobre las OSC:

*Las restricciones a la libertad de expresión se han convertido en la norma en Camerún. Algunas de las tácticas utilizadas son la censura, las amenazas, los arrestos y detenciones arbitrarios, la intimidación, los robos en las oficinas de las OSC, el cierre de medios, los elevados impuestos para las emisoras privadas de televisión y el arresto domiciliario. Desde noviembre de 2016, cuando comenzó la crisis en el noroeste y suroeste de Camerún, se impusieron restricciones adicionales, bajo la forma de cortes, perturbaciones e interrupciones de las comunicaciones salientes de las OSC en las dos regiones.*

*Como resultado, la sociedad civil fue privada de acceso a la información, de medios para diseminar y compartir información y organizarse de manera eficaz, y de la posibilidad de recibir informes para continuar con sus actividades. Esto a su vez resultó en dilaciones en la ejecución de sus programas y retrasos en el cumplimiento de sus obligaciones hacia sus donantes. La sociedad civil se vio afectada por las discontinuidades del apoyo financiero de sus aliados como consecuencia de dichos retrasos.*

La sociedad civil, continúa explicando Maximilienne, hizo lo que pudo para resistir la prohibición:

*La sociedad civil movilizó todas sus fuerzas y energías para instar al gobierno a restablecer la conexión a internet. Varias OSC de todo el mundo, entre ellas actores de la sociedad civil de Camerún, emitieron múltiples declaraciones para condenar la decisión del gobierno. El Representante Especial para África Central del Secretario General de la ONU y director de la Oficina Regional de la ONU para África Central*

LA PROLONGADA PROHIBICIÓN IMPUESTA EN CAMERÚN CONSTITUYÓ UNA LISA Y LLANA NEGACIÓN DE DERECHOS, YA QUE EL ACCESO A INTERNET HA SIDO RECONOCIDO COMO UN DERECHO HUMANO POR LAS NACIONES UNIDAS, Y TUVO UN PROFUNDO IMPACTO TANTO SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN COMO SOBRE LA ECONOMÍA



(UNOCA), François Louncény Fall, describió la decisión del gobierno como una “situación deplorable”. Como resultado de los enormes esfuerzos y las diversas batallas peleadas por las OSC, tres meses más tarde se restableció la conexión a internet.

Pero incluso cuando el acceso a internet fue restablecido, la urgencia del problema persistió. Las protestas continuaron, al igual que la represión estatal. Entre las acciones emprendidas se contó la modalidad conocida como “**ciudad fantasma**”: protestas realizadas todos los lunes y martes en las cuales la gente se quedó en sus casas, y por efecto de las cuales ciudades enteras se paralizaron. Los líderes de la protesta también pidieron a las empresas de la región que retuvieran los impuestos.

La represión estatal fue más mortífera en las protestas programadas para el 1 de octubre, el día que conmemora la unión de las regiones angloparlantes y francófonas de Camerún. En 2017 se realizó en esa fecha una declaración simbólica de independencia de las regiones angloparlantes, bajo el nombre de República Federal de **Ambazonia**. Interpretadas como una provocación hacia el Estado, las protestas fueron enfrentadas con fuerza letal. Las fuerzas militares utilizaron municiones reales y gases lacrimógenos. Se produjeron por lo menos **ocho muertes**, aunque **fuentes creíbles** calcularon que las fuerzas de seguridad mataron a por lo menos 30 personas en las protestas y los sucesos subsiguientes. En vísperas de las protestas de octubre, el gobierno también **dictó** nuevas y más estrictas reglas sobre las reuniones públicas y el movimiento de personas, cerró su frontera con Nigeria, a través de la cual huían las personas que sufrían persecución, y una vez más bloqueó las aplicaciones para enviar mensajes así como las de redes sociales.

El gobierno aplicó una política de arresto y encarcelamiento de sus críticos; **más de 100 personas fueron arrestadas** desde el inicio de las protestas. Algunas de ellas fueron detenidas bajo acusaciones de terrorismo, para las cuales es posible imponer la pena de muerte. Hubo informes de desapariciones y torturas. En febrero comenzó en Yaundé, la capital de Camerún, el juicio

de **tres líderes de la protesta**. Los tres habían sido arrestados en enero, tras convocar a las manifestaciones, y mientras estuvieron detenidos fueron confinados en solitario. Los juicios sufrieron numerosos retrasos. Dos de los acusados, Fontem Neba y Felix Agbor-Balla, líderes del prohibido Consorcio Anglófono de la Sociedad Civil de Camerún, formaban parte de un grupo de detenidos **liberados** en agosto. Sin embargo, el tercero, el activista y periodista **Mancho Bibixy**, que en noviembre de 2016 había realizado una protesta individual en la que transportaba un ataúd, sigue detenido al momento de escribir este informe, y según trascendió, su estado de salud es malo. Otros **permanecieron** en la cárcel.

Los líderes religiosos no fueron inmunes a la persecución: una cantidad de **líderes cristianos** que apoyaron las protestas pacíficas y la disidencia fueron citados para ser juzgados en abril. En noviembre, **Aboubakary Siddiki**, líder del principal partido de oposición del norte de Camerún y crítico prominente del presidente, recibió una condena de 25 años de prisión tras un viciado juicio militar. El mismo mes, el gobierno emitió **órdenes de arresto** para 15 líderes del partido separatista angloparlante Consejo Nacional de Camerún Meridional. **Patrice Nganang**, un escritor camerunés que vive en los EEUU, fue arrestado en diciembre cuando intentaba abandonar el país; permaneció en prisión durante tres semanas por escribir un artículo **crítico** del gobierno. Muchos periodistas fueron arrestados y detenidos, y varias estaciones de radio fueron **cerradas**. En septiembre, el Consejo Nacional de Comunicaciones de Camerún **suspendió** a 30 periodistas con el argumento de que sus informes eran “tendenciosos”.

La pesada mano del Estado castigó luego a Ahmed Abba, un corresponsal de *Radio France Internationale*, detenido en julio de 2015 por informar sobre los refugiados y el grupo terrorista Boko Haram. Después de un juicio que se caracterizó por los múltiples retrasos, donde no se llamó a testigos clave y se ocultó documentación a los abogados defensores, Ahmed fue condenado en abril por delitos vinculados con el terrorismo; un tribunal militar lo sentenció a 10 años de prisión. En julio, la injusticia del trato que recibió fue destacada

por el Comité para la Protección de los Periodistas, que lo reconoció con su **Premio Internacional a la Libertad de Prensa**.

Si bien Camerún tiene sin duda un problema de terrorismo por la actividad de Boko Haram en el extremo norte del país, esto ocurre lejos del área angloparlante. Las protestas que tuvieron lugar allí no tuvieron vínculo alguno con el terrorismo; sin embargo, el Estado nunca dejó de equiparar el legítimo disenso con el terrorismo ni de **utilizar las leyes antiterroristas** para silenciar a sus críticos. Esto se debió a que la fuerza de las protestas y la amenaza de secesión angloparlante fueron vistas como una amenaza para el dominio perpetuo del presidente Paul Biya, quien, tras 42 años en el poder -35 de ellos como presidente- es ahora el líder político con más tiempo en ejercicio. Maximilienne destaca el reciente deterioro de la democracia, intensificado en la misma medida en que el presidente Biya se ha aferrado al poder:

*Hace una década se observó que las prácticas democráticas se estaban arraigando y se pensó que el proceso continuaría. Pero la experiencia fue breve, ya que en 2013 el presidente declaró la guerra a Boko Haram, que está sembrando el terror en la región del extremo norte. Como resultado, la democracia ha recibido un duro golpe, que tomó la forma de una ley electoral que no favorece la transparencia y la competencia política genuina, no es neutral y limita la participación por medio de la imposición de costos exorbitantes. Además, se han impuesto leyes restrictivas de las libertades fundamentales. Se ha establecido un estado de no imperio de la ley.*

*El Estado de Camerún sigue siendo represivo. Todos los días somos testigos de violaciones de libertades fundamentales. El predominio del Poder Ejecutivo sobre el legislativo y el judicial es una constante. La práctica de la democracia no ha cambiado realmente en los últimos tiempos, porque hemos tenido el mismo presidente durante 35 años. Además de esto, hay una completa ausencia de un verdadero partido de oposición, porque el gobierno reprime toda expresión o manifestación por parte de cualquier partido que no sea el gobernante.*

Dadas las difíciles condiciones que la represión impone a la sociedad civil, le pedimos a Maximilienne que concluya con la identificación de las principales necesidades de apoyo de la sociedad civil:

*Necesitamos varias formas de apoyo. Necesitamos un apoyo financiero de mediano y largo plazo que tenga cierta flexibilidad, además de fondos de emergencia permanentes que puedan reducir la vulnerabilidad de los defensores en riesgo. Necesitamos apoyo técnico, tal como el suministro de equipos de seguridad más sofisticados. También se necesita entrenamiento permanente para generar capacidades de la sociedad civil en las áreas de seguridad digital, seguridad física y gestión de datos informatizados; consolidación de la democracia y el imperio de la ley y participación en el proceso electoral y temas de buena gobernanza; monitoreo e informes de derechos humanos, particularmente en contextos de conflicto o terrorismo; e incidencia en foros nacionales, regionales e internacionales.*

## TURQUÍA: UN REFERÉNDUM QUE NO CONTRIBUYE A LA DEMOCRACIA

Desde el fallido intento de golpe de estado de julio de 2016, el espacio cívico en **Turquía** quedó atrapado en una espiral descendente. El presidente Erdoğan ha reafirmado su control del poder a través de detenciones y despidos masivos. De acuerdo con el sitio web **Turkey Purge**, en el momento de escribir este informe la cantidad de personas despedidas, a menudo bajo acusaciones no sustanciadas de asociación con críticos del régimen, asciende a 146.713, en su mayoría funcionarios públicos, profesores y académicos. Asimismo, 128.998 personas fueron detenidas y 3.003 instituciones educativas fueron cerradas. Trece miembros del parlamento pertenecientes a la fuerza de oposición pro-

kurda, el Partido Popular Democrático, fueron despojados de su inmunidad y **detenidos** bajo acusaciones de terrorismo.

El 16 de abril, el presidente Erdoğan apuntaló aún más su poder al ganar un referéndum de reforma constitucional, por un escaso margen de 51 a 49%. Los cambios clave introducidos fueron la abolición del cargo de primer ministro y el reemplazo del sistema parlamentario por un sistema presidencialista. En una mirada superficial, los cambios aprobados mediante el referéndum podrían ser caracterizados como avances democráticos, ya que, por ejemplo, establecen la elección directa del presidente por parte de la ciudadanía. En realidad, sin embargo, los cambios fueron introducidos en un contexto en el cual la capacidad de expresar disenso y participar en una variedad de escenarios políticos, características esenciales de una democracia que funciona, ha sido despiadadamente eliminada. Los cambios tuvieron el efecto de consolidar y centralizar el poder del presidente Erdoğan, inclusive sobre el poder judicial, y le permitirán permanecer en el cargo durante más tiempo. El presidente Erdoğan había ambicionado una presidencia ejecutiva durante mucho tiempo. Es difícil eludir la sospecha de que aprovechó y manipuló el rechazo público del intento de golpe de estado y el comprensible temor de la ciudadanía al terrorismo para obtenerla.

Más que como una celebración y ampliación de la democracia, el referéndum debe ser visto como consistente con un patrón más amplio, observable en distintos países de todo el mundo, caracterizado por el uso de los dispositivos democráticos para conferir legitimidad al poder. Una vez realizada la votación, se interpreta que el poder reside en el jefe de gobierno y no se considera que sea necesario efectuar ulteriores consultas. El estrecho margen del resultado de la votación en Turquía no produjo ningún reconocimiento visible de la necesidad de reconsiderar los planes o generar mayor consenso.

Dado que el referéndum fue celebrado bajo un estado de emergencia que **continúa** al momento de redactar este documento, y que tantas voces disidentes han sido encarceladas o bien obligadas a autocensurarse, es difícil



Manifestantes en Estambul reclaman la anulación del referéndum turco

Crédito: Getty Images



de justificar la afirmación de que la votación reflejó la voluntad popular. Incluso con estas ventajas, el régimen gobernante trabajó para sesgar el voto en su favor. El presidente Erdoğan **denunció** a los que hacían campaña por el ‘no’ como partidarios del terrorismo y del fallido golpe de estado. Varios activistas por el ‘no’ fueron arrestados bajo acusaciones tales como la de propagar el odio. Y como muchos medios independientes habían sido cerrados o eran acosados, y muchos de los medios de comunicación que seguían en pie pertenecían a **partidarios** del gobierno, era difícil escuchar opiniones disidentes: se **calcula** que el 90% del tiempo en el aire fue otorgado a partidarios del ‘sí’.

Por lo tanto no resultó sorprendente que los observadores electorales de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) **consideraran** que en el referéndum había habido un “desequilibrio significativo” a favor de los partidarios del ‘sí’. Los problemas señalados incluyeron la intimidación, el rol de las agencias estatales en la campaña y la decisión de último momento de aceptar papeletas de votación sin sellar. Un miembro de la misión de observadores del Consejo Europeo sugirió que por lo menos 2,5 millones de votos, una cantidad decisiva, podrían haber sido manipulados, y **caracterizó** al referéndum como “injusto y coercitivo”. La decisión de aceptar papeletas sin sellar generó protestas que fueron reprimidas y hubo varios detenidos. El régimen se negó a responder a estas críticas y, en cambio, celebró su victoria con otra **ola de detenciones**: según se informó, más de 1.000 personas fueron arrestadas en una ofensiva coordinada el 26 de abril.

Sin embargo, como lo expresa **Huseyin Hurmali**, de la Fundación de Periodistas y Escritores (**Journalists and Writers Foundation, JWF**), aunque el resultado del referéndum era predecible y es probable que empeore aún más las condiciones para la sociedad civil, cabe albergar esperanzas debido a la energía puesta en la campaña en su contra y el estrecho margen de diferencia en la votación, que indican que sigue existiendo una resistencia democrática y una demanda de alternativas:

*El referéndum constitucional lamentablemente puso fin a la democracia y la separación de poderes, permitiendo que el presidente Erdoğan combine los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Si bien este sistema ya estaba funcionando de hecho en Turquía desde hacía varios años, en la medida en que Erdoğan había capturado cada vez más elementos del Estado, la enmienda de la Constitución lo instituirá de forma permanente como sistema de jure.*

*Pero aún hay esperanza, ya que observamos que, en una elección injusta y probablemente fraudulenta, la mitad de los votantes estuvieron en contra de esta propuesta e impidieron que Erdoğan obtuviera*

LA CAMPAÑA POR EL ‘NO’ PUEDE SER CONSIDERADA COMO UNA EXPRESIÓN MUY CREATIVA DEL DISEÑO DEMOCRÁTICO. EL ACTIVISMO POLÍTICO DE LOS JÓVENES CONTRA EL REFERÉNDUM DEMUESTRA QUE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN SERÁ DIFÍCIL DE ERRADICAR EN TURQUÍA

*una victoria decisiva. La campaña por el ‘no’ puede ser considerada como una expresión muy creativa del disenso democrático. El activismo político de los jóvenes contra el referéndum demuestra que la libertad de expresión será difícil de erradicar en Turquía.*

*Sin duda alguna, hablar en contra de Erdoğan conlleva riesgos: los que hicieron campaña por el ‘no’ afirmaron que encontraron coerción y represión apoyadas por el gobierno. En marzo, el principal partido opositor, el Partido Republicano del Pueblo (CHP) dio a conocer un informe de 78 puntos sobre las irregularidades y la represión padecida por quienes hicieron campaña por el ‘no’. Pero aun así, los manifestantes pegaron fotografías de artistas y políticos encarcelados en las estaciones. Los videos de la policía interrogando a mujeres que se manifestaron en contra del referéndum se hicieron virales en las redes sociales. Los funcionarios prohibieron una canción kurda que alentaba el voto por el ‘no’. (El subtítulo de la canción decía: “Escuchar esta canción en Turquía hará que termines en prisión”.) Mujeres jóvenes con máscaras coloridas que gritaban ‘¡no!’ y estudiantes universitarios que golpeaban tambores y cantaban canciones acerca de la libertad se contaron entre los miles de personas que marcharon por la calle Istiklal, una popular avenida de Estambul, para hacer campaña contra el aumento de los poderes del presidente Erdoğan. La ofensiva de Erdoğan contra el disenso no es novedad, pero la creatividad de los jóvenes sigue alimentando la esperanza.*

La determinación del régimen para sofocar el disenso colocó a los medios de comunicación en la primera línea de ataque: Turkey Purge denunció que 308 periodistas fueron arrestados y 187 medios de comunicación clausurados desde el intento de golpe de estado. El proyecto **Turkey Blocks** hizo un seguimiento de las numerosas restricciones a la libertad en internet, tales como el bloqueo de Wikipedia en abril bajo la acusación de que sus colaboradores “apoyan el terror”, y la supresión de las comunidades LGTBI de Reddit por órdenes del gobierno. Incluso el uso de tecnologías de encriptación

levantaría sospechas: en septiembre se informó que **75.000 personas** habían sido arrestadas por el solo hecho de descargar una aplicación para enviar mensajes encriptados, y **12 personas** fueron arrestadas en julio por participar en un taller sobre seguridad digital. El disenso comenzó a ser calificado habitualmente como terrorismo y las voces disidentes fueron difamadas con la afirmación de que estaban asociadas con el movimiento Hizmet de Fethullah Gülen, residente en EEUU, antiguo aliado y hoy opositor al presidente Erdoğan, y según el gobierno el patrocinador del intento de golpe de estado.

La persecución de los educadores y sus instituciones tuvo alarmantes connotaciones totalitarias: sugirió que el régimen se proponía controlar no solo lo que sus ciudadanos podían decir, sino también lo que podrían aprender y, en última instancia, pensar. Huseyin abunda en los modos en que fue reprimido el disenso:

*El presidente Erdoğan y el gobierno turco están librando una guerra contra el disenso disfrazada de guerra contra el terror, utilizando como excusa el intento de golpe de estado.*

*La tentativa de golpe le dio al gobierno un pretexto para declarar al movimiento Hizmet como “organización terrorista armada”, culpar a Gülen y sus seguidores del golpe de estado y agrupar a cualquiera que estuviera siquiera remotamente conectado con la red bajo el rótulo de “partidario del golpe de estado” y “miembro de una organización terrorista armada”. En el derecho penal turco este es un delito grave que acarrea duras condiciones de encarcelamiento. Los decretos dictados durante el estado de emergencia son inmunes al control parlamentario y judicial.*

*Más de la mitad de los periodistas que están en la cárcel en todo el mundo son turcos. Turquía tiene la mayor cantidad de periodistas encarcelados de todo el mundo... Los periodistas se han enfrentado a*

*diversas acusaciones, entre ellas las de espionaje, pertenencia a una organización terrorista, difusión de propaganda terrorista e intento de derrocar al gobierno actual. Las prácticas de silenciamiento de los periodistas a través del abuso de la justicia penal y la ampliación del alcance de la definición del terrorismo son algunas de las violaciones de derechos humanos que se citan con mayor frecuencia en los informes sobre derechos humanos, además de aparecer en los documentos de la ONU, la UE, el Consejo Europeo y la OSCE.*

*Además de los periodistas y escritores encarcelados, hay muchos otros que recibieron órdenes de detención y fueron obligados a huir de Turquía por temor a enfrentar un proceso injusto. Estos periodistas y escritores tienen que vivir en el exilio, soportando dificultades financieras, la intimidación de sus familias en Turquía, la denegación de servicios consulares en las embajadas y consulados turcos, estatus legal incierto en sus respectivos países de acogida y necesidad de ocultar sus identidades en los países donde consiguieron asilo debido a las continuas amenazas de muerte que los partidarios del presidente Erdoğan publican en las redes sociales. El Estado utiliza sus embajadas y consulados en todo el mundo para hostigar a los opositores negándoles servicios regulares, cancelando sus pasaportes y amenazándolos con revocar su ciudadanía si son acusados de un delito en Turquía y no regresan al país dentro de un plazo de tres meses tras haber sido notificados. Algunos de los periodistas y escritores que están en prisión o en el exilio han perdido todos sus bienes por efecto de órdenes de decomiso emitidas por tribunales no independientes. La victimización de los periodistas y escritores en Turquía se extiende a sus familiares cercanos, dentro y fuera de Turquía.*

*Todavía hay en Turquía algunas pocas organizaciones de medios de comunicación independientes y críticas, y su personal trabaja bajo constante amenaza de arresto, violencia, discurso de odio, discriminación, elaboración de perfiles, censura y muerte. La*

*incautación y el cierre de organizaciones de medios de comunicación por parte del gobierno significa no solo que se ha perdido la libertad de los medios, sino también que una gran cantidad de personal queda desempleado. Más del 30% de los periodistas ha perdido su trabajo y les es negado el derecho de ejercer su profesión en otra institución, debido a que están en la lista negra del gobierno.*

En su intento de apuntalar sus principales apoyos, socialmente conservadores, el régimen también convirtió a la moral en un campo de batalla político. En noviembre, el presidente Erdoğan **acusó** al CHP de abandonar los valores morales después de que se revelara que había alentado a candidatos LGBTI a competir en una elección local. Poco después las autoridades de la capital, Ankara, impusieron una **prohibición indefinida** de realizar eventos públicos LGTBI. La Marcha del Orgullo Gay programada para junio también fue prohibida con escasa anticipación, y cuando algunas personas intentaron marchar a pesar de la prohibición, la marcha fue disuelta con gases lacrimógenos y balas de goma, y 25 personas fueron arrestadas. Al mes siguiente, siete personas fueron **arrestadas** tras la prohibición de una protesta transexual. Parece claro que parte del precio a pagar por la supervivencia del régimen es la introducción de mayores dificultades en las vidas de personas ya de por sí socialmente excluidas.

El régimen intentó internacionalizar su guerra contra el disenso: en mayo, manifestantes que protestaban frente a la residencia del embajador de Turquía en Washington D.C., EEUU, fueron **atacados con violencia** por las fuerzas de seguridad turcas, con un saldo de 11 heridos. Un aliado cercano, Turkmenistán, también siguió **reprimiendo** presuntas actividades de Hizmet en su territorio mediante arrestos y detenciones. En una indicación de la sensibilidad del régimen a la exposición internacional, trabajadores de organizaciones humanitarias que se encontraban en la frontera de Turquía con Siria fueron atacados varias veces a lo largo de 2017. En marzo, el Estado revocó la licencia de Mercy Corps, una organización humanitaria con sede en EEUU, que trabajaba con refugiados sirios. El **mes siguiente**, 15 trabajadores



de International Medical Corps, otra organización humanitaria basada en EEUU que trabajaba cerca de la frontera, fueron detenidos, y en mayo cuatro trabajadores de Syrian Dan Church Aid fueron **expulsados**.

Huseyin Hurmali conoce de cerca el modo en que el régimen trasladó al terreno internacional su guerra interna contra el disenso. El gobierno revocó la personería de OSC que estaban acreditadas ante el Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC), y luego **argumentó con éxito** que, debido a que esas OSC ya no existían formalmente, su acreditación les debía ser retirada. Así, intentó aprovechar la naturaleza estado-céntrica del sistema internacional para privar a las OSC de una plataforma clave donde compartir sus puntos de vista y conectarse con la sociedad civil internacional. La organización de Huseyin se contó entre las que recibieron ese trato:

*El estatus consultivo general de JWF ante ECOSOC fue revocado en la reunión del ECOSOC del 19 de abril. La justificación provista por el gobierno turco para retirar el estatus consultivo a JWF se basó en el hecho de que las operaciones de JWF habían sido interrumpidas el 22 de julio de 2016 por un decreto de emergencia tras el golpe, emitido a causa de nuestra presunta asociación con una asociación terrorista ficticia. Cabe señalar que JWF es una organización no gubernamental 501(c) que desde 2014 tiene su sede central en Nueva York... JWF no fue informada por escrito de esta acción arbitraria, ni se nos proporcionó una plataforma para defender nuestros 23 años de dedicación a la paz y la protección de los derechos humanos.*

*La decisión es claramente política y se logró gracias a la posición privilegiada de los estados miembros con respecto a las OSC en el sistema del ECOSOC... También existe una creciente preocupación por los actos de intimidación y represalias contra las personas y organizaciones que cooperan con el sistema de la ONU.*

Mirando hacia el futuro, la situación puede parecer desoladora. Sin embargo, sugiere Huseyin, es necesario concentrarse en lo que se debe y puede hacer, y en cómo la ayuda internacional puede llegar a la sociedad civil turca:

*Primero y principal, el estado de emergencia debe finalizar tan pronto como sea posible y el gobierno turco debe detener la represión de su pueblo y establecer los derechos fundamentales de las personas.*

*Como la sociedad civil y las organizaciones de medios independientes en Turquía han sido seriamente afectadas por el proceso de purga, las delegaciones internacionales de la sociedad civil y las organizaciones de medios de comunicación que visitan Turquía deben mostrar solidaridad con todas las víctimas de la opresión estatal y convertirse en su voz. El amplio espectro de funcionarios, profesionales, periodistas e intelectuales que tuvieron que huir de Turquía tras el intento de golpe de estado debe ser apoyado en su lucha por encontrar seguridad y protección jurídica. Los periodistas exiliados que lanzaron iniciativas para informar sobre las violaciones de derechos humanos en Turquía necesitan la ayuda de la sociedad civil internacional para llevar adelante esta tarea riesgosa y costosa.*

*El resto de las voces disidentes, que se han expresado recientemente en el 49%, y posiblemente en un porcentaje mayor, de los votantes del referéndum, solo puede mantenerse vivo si siente el apoyo de la sociedad civil internacional a través de campañas en las redes sociales, ya que éstas son la plataforma donde pueden escucharse voces alternativas. Siempre que los ciudadanos turcos sean silenciados por el miedo, la comunidad internacional debe hablar por ellos.*

## ARMENIA: MEDIOS ATACADOS POR DENUNCIAR CORRUPCIÓN ELECTORAL

En **Armenia**, las elecciones de abril y mayo resultaron en el mantenimiento del partido gobernante en el poder, pero se vieron empañadas por denuncias de fraude, entre las cuales se destacaron la compra de votos y el uso indebido de recursos estatales para apoyar a los candidatos del partido gobernante. **Artur Sakunts**, de *Helsinki Citizens' Assembly - Vanadzor Office* (Asamblea de Ciudadanos de Helsinki - Oficina de Vanadzor) describe los importantes abusos electorales:

*Desde 2013, los derechos humanos y la democracia han retrocedido considerablemente en Armenia. El referéndum constitucional celebrado en 2015, y las elecciones a la Asamblea Nacional y al Consejo de la ciudad de Ereván de 2017, estuvieron marcados por el fraude y violaciones de procedimiento.*

*Durante las elecciones para la Asamblea Nacional del 2 de abril y las elecciones para el Consejo de la ciudad de Ereván, el 14 de mayo, se identificaron abusos generalizados que tomaron la forma de falsa observación. La Comisión Central Electoral acreditó a alrededor de 28.000 observadores de 49 organizaciones para observar las elecciones de la Asamblea Nacional. La abrumadora mayoría de esos observadores se desempeñó en las mesas electorales como representante de los intereses del gobernante Partido Republicano o del Bloque Tsarukyan, que salió segundo en las elecciones.*

Para Artur, las debilidades observadas con respecto a las elecciones no fueron accidentales, sino que fueron deliberadamente habilitadas por cambios recientes:

*El Código Electoral aprobado en mayo de 2016 impuso importantes restricciones a los observadores y representantes de los medios. En particular, dio a las comisiones electorales de cada distrito el derecho de establecer la cantidad máxima permitida de observadores y representantes de los medios en cada mesa electoral. Para las organizaciones dedicadas a la observación electoral, el Código estableció el requisito de que tuvieran en sus estatutos alguna disposición sobre el tema de derechos humanos y democracia por lo menos desde un año atrás; para los medios de comunicación impuso un requisito de acreditación a la vez que estableció una cantidad limitada de representantes. En consecuencia, un medio de comunicación puede tener un máximo de 50 representantes en todo el país. El nuevo Código Electoral estipula también que los miembros de la comisión pueden retirar a los observadores, los representantes de los medios de comunicación y los delegados de la mesa electoral por medio de una votación.*

*Cabe destacar que el Código Electoral considera a las OSC como los principales entes de monitoreo, y en particular de observación electoral; sin embargo, no les confiere el derecho de apelar ante las acciones de las comisiones electorales o los resultados de la elección, ni de presentar ninguna otra denuncia.*

*Como resultado de enmiendas aprobadas un mes más tarde, el Código Electoral también estipuló la publicación de las listas de votantes firmadas, algo que la oposición y la sociedad civil habían exigido durante años. A los ciudadanos se les otorgó el derecho de presentar reclamos en casos de identificación fraudulenta, pese a que el Código Penal incluía un artículo sobre declaraciones falsas con respecto a dichas solicitudes. Según el informe de la Comisión Central Electoral, una sola persona presentó una solicitud por identificación fraudulenta de votantes en el contexto de las elecciones para la Asamblea Nacional en abril. Entre otras razones, esto podría deberse*

*al artículo del Código Penal sobre declaraciones falsas, aunque se considera que la cantidad de casos de votos múltiples o identificación fraudulenta durante las elecciones no fue considerable, y que las autoridades distorsionaron las elecciones principalmente por medio del abuso de recursos administrativos y la compra de votos.*

Intentar exponer la corrupción conllevaba riesgos, como lo pudieron comprobar varios periodistas. El periodista **Sisak Gabrielian** fue atacado cuando filmaba un caso de compra de votos en las mesas electorales durante las elecciones de abril y fue amenazado cuando intentó hacerlo nuevamente durante las elecciones de mayo. La periodista **Anna Zakharyan** también fue atacada cuando intentaba filmar la distribución de papeletas ya marcadas y la distribución de sobornos, y su teléfono fue confiscado. En total, alrededor de 10 periodistas **denunciaron** haber sido atacados o enfrentado obstáculos para hacer su trabajo durante las elecciones de abril.

Artur sugiere que las elecciones fueron consistentes con la tendencia, en ascenso en Armenia, a la concentración de poder en manos del partido gobernante:

*Como resultado del referéndum constitucional de 2015, Armenia pasó de república semi-presidencial a república parlamentaria; los cambios comenzaron a ser implementados durante las elecciones de 2017. El nuevo sistema parlamentario fortaleció la posición dominante del Partido Republicano y el poder de su líder.*

*Varias figuras de la oposición han sufrido persecución. Todas las demostraciones de activismo cívico han enfrentado duras reacciones y presiones por parte de los órganos de aplicación de la ley, y el espacio para las OSC y las iniciativas de la sociedad civil ha disminuido aún más. La **Guerra de los Cuatro Días** con Azerbaiyán, en abril de 2016, provocó una gran pérdida de vidas y expuso la vulnerabilidad del país a las amenazas externas. Todos estos procesos se han producido en una atmósfera de impunidad.*



Los votantes se movilizan en torno de las elecciones en Armenia



Junto con la libertad de expresión, el acceso a la información siguió siendo un tema controvertido. La legislación vigente sobre libertad de información es **criticada** por ser defectuosa, incluir excesivas limitaciones y concentrar el poder en manos de los funcionarios públicos. Según un **informe** del Comité para Proteger la Libertad de Expresión, una OSC armenia, durante el período post-electoral se observó un fuerte aumento del número de violaciones del derecho de recibir y diseminar información. Un nuevo proyecto de ley, que circuló en la segunda mitad de 2017, fue criticado por la sociedad civil y los medios de comunicación, pero como la redacción del proyecto se estaba realizando sin consulta a la sociedad civil, no hubo canales para hacer recomendaciones para mejorarlo.

En agosto, la Asociación Helsinki en Armenia **alertó** sobre las crecientes amenazas sufridas por defensores y abogados de derechos humanos. Otra cuestión pendiente es la persistente ausencia de rendición de cuentas por la violencia policial desatada en respuesta a las protestas de 2016, mientras 40 manifestantes permanecían en prisión. La sociedad civil también llamó la atención sobre la **corrupción** en el uso de la ayuda económica de los EEUU. Para Artur, estos desafíos apuntan a la necesidad de enfatizar la separación de poderes:

*Para que calidad de la democracia mejore, una cuestión importante es la independencia judicial respecto del poder ejecutivo. El control del poder judicial por parte del ejecutivo es la principal herramienta que usa el gobierno para reforzar la impunidad, la cual constituye un obstáculo para la protección efectiva de los ciudadanos y los grupos de la sociedad civil.*